

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA NÚMERO: 86/2009.**

**SERVIDORES PÚBLICOS:
1 Y *2*.**

México, Distrito Federal, a once de marzo de dos mil trece.

VISTOS; para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **86/2009;** y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia. Por oficio DGRARP/DACA/205/2009, de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, el entonces Director de Acciones y Control Administrativo remitió las actas entrega-recepción CSCJN/DGRARP/DACA/E-R/034/09 de tres de septiembre de dos mil nueve y CSCJN/DGRARP/DACA/E-R/040/09 de dieciséis de octubre de dos mil nueve, en la que se anexó el resultado del inventario físico de publicaciones oficiales para venta, realizado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respecto de hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa atribuibles a ***1***, ***** de la Casa de la Cultura Jurídica antes citada y ***2***, encargada del área de venta de publicaciones oficiales, en relación a un faltante de trescientos ochenta y tres artículos, por un importe de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos dos pesos 00/100 moneda nacional); por lo que en acuerdo de uno de junio de dos mil diez, se tomó conocimiento de lo informado y se inició el cuaderno de investigación número **C.I. 86/2009.**

SEGUNDO. Procedimiento. Por acuerdo de dos de abril de dos mil doce, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el procedimiento de responsabilidad administrativa 86/2009 en contra de las personas señaladas, por estimar la existencia de elementos suficientes para presumir que los involucrados incurrieron en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación contenida en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Y 20 DEL ACUERDO NÚMERO 9/2005, DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CINCO DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL Y DEL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE ÉSTOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, al no coordinar las actividades de esa Casa de la Cultura Jurídica, entre ellas, la venta de publicaciones oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se ordenó requerir a los servidores públicos a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles rindieran el informe relativo y exhibieran las pruebas que estimaran pertinentes.

En autos de dos y ocho de mayo de dos mil doce, el Contralor tuvo por rendidos en tiempo y forma los informes requeridos a *1* y *2*, y por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales e instrumental de actuaciones; por auto de treinta y uno de enero de dos mil trece, declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del Acuerdo

Plenario 9/2005. Por diverso proveído de trece de febrero de dos mil trece, se emitió el dictamen respectivo, en el que se propone sancionar con amonestación privada y sanción pecuniaria a los involucrados, *1* con la cantidad de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos dos 00/100 moneda nacional) más la mitad del daño que corresponde a \$ 14,601.00 (catorce mil seiscientos un pesos 00/100 moneda nacional) dando un total de **\$43,803.00 (cuarenta y tres mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda nacional)** y *2*, con la cantidad de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos dos 00/100 moneda nacional) más la cantidad de \$5,714. 00 (cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), dando un total de **\$34,916. 00 (treinta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional).**

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 25, segundo párrafo, del Acuerdo Plenario 9/2005, en tanto que se trata de una servidora pública y de un exservidor público de este Alto Tribunal, a los cuales se les atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

SEGUNDO. Marco normativo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo Plenario 9/2005 ya mencionado, en todas las cuestiones relativas al

procedimiento no previstas en él, serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones.

TERCERO. Análisis de la conducta atribuida a la servidora pública y al exservidor público. Del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta que se les atribuye **a la servidora pública y al exservidor** de mérito es la prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación contenida en los artículos 7 y 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 20 del Acuerdo General Plenario 9/2005, consistente en el incumplimiento con el servicio encomendado, en el caso de ***2*** era la encargada de la venta de publicaciones oficiales, debía tener absoluto control de las obras que ingresaban y salían de la librería, ya que es evidente que no se condujo con el debido cuidado, pues no detectó el faltante en dichas ventas y por lo que respecta a ***1*** debía coordinar cada una de las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre ellas, la venta de publicaciones oficiales de este Alto Tribunal y tampoco detectó el faltante en dichas ventas.

De las constancias que obran en autos, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción II, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende:

I. A. *1* en la época en que ocurrieron los hechos ostentaba el nombramiento de ***** por tiempo fijo, puesto de confianza adscrito a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el periodo que comprendió del dieciséis de abril al treinta de noviembre de dos mil nueve, fecha en la que causó baja por cambio de puesto y adscripción (fojas 233, 229, 224 y 218 del cuaderno de pruebas 8), por lo que dentro de sus obligaciones, estaba la de coordinar cada una de las actividades de la Casa de Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre ellas, la venta de publicaciones oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

B. De la copia certificada del documento denominado “funciones principales de la plaza” de *1*, correspondiente al puesto de Jefe de Departamento de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde se acredita que incumplió con el servicio que le fue encomendado, ya que no llevó a cabo una adecuada coordinación, supervisión y administración del personal responsable del módulo de ventas, con respecto a la existencia de publicaciones y al

producto de la venta de la de las mismas (foja 227 del cuaderno de pruebas 8).

C. De las copias certificadas de las actas entrega-recepción CSCJN/DGRARP/DACA/E-R/034/09 de tres de septiembre de dos mil nueve y CSCJN/DGRARP/DACA/E-R/040/09 de dieciséis de octubre de dos mil nueve se acredita que fue ***** de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, (fojas 2 a 13 y 45 a 56 del expediente principal, respectivamente), por tanto, debía coordinar cada una de las actividades de esa Casa de la Cultura Jurídica.

D. De la copia certificada del “Memorándum de la revisión efectuada a la Casa de la Cultura Jurídica, por el período del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve”, así como copias certificadas del inventario de existencias que elaboró personal de la Contraloría el veintiuno de septiembre de dos mil nueve (fojas 7, 8 y 63 a 71 del cuaderno de pruebas 5) se acredita que se obtuvo como resultado un faltante de 383 artículos, representados en 132 títulos de publicaciones oficiales, mismos que valuados al precio de venta ascienden a la cantidad de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional).

E. En el informe que *1* presentó el veintisiete de abril de dos mil doce, (fojas 488 a la 500 del expediente principal), se desprende:

Reconoció que del dieciséis de abril al treinta de noviembre de dos mil nueve, fungió como jefe de departamento en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, asimismo, que durante el periodo del tres de septiembre al dieciséis de octubre de ese año fue ***** de esa sede, cuya responsabilidad era coordinar las actividades de la misma; en ese sentido, los reconocimientos que hace el exservidor público constituyen una confesión expresa del nombramiento que ocupó en la Casa de la Cultura antes citada, así como del encargo y responsabilidad que se le asignó a partir del tres de septiembre de dos mil nueve como ***** de la misma, los que merecen valor probatorio pleno, conforme los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Manifiesta que en el memorándum que elaboró la Dirección de Auditoría Administrativa, el cual adjuntó a su escrito de defensas como anexo I (foja 491 del expediente principal), se hizo constar que en el acta entrega-recepción de tres de septiembre de dos mil nueve, se especificó en el apartado XIV, de ventas de libros, que sí existió faltante o sobrante alguno; afirmación, que constituye una manifestación aislada sin ningún sustento, pues en dicho documento nunca se

aseveró que a la fecha de su elaboración existía un faltante en el área de ventas de publicaciones de la multicitada Casa de Cultura Jurídica, tanto es así, que en el apartado “XIV.- Ventas de libros” de la referida acta entrega-recepción, sólo se observa lo siguiente:

“XIV.- Ventas de libros.- *Inventario que ampara las existencias de libros que se tiene para su venta, así como, el último depósito de fecha cuatro de septiembre del año en curso por la cantidad de \$2,571.50 (dos mil quinientos setenta y un pesos 50/100) que corresponde a la venta de libros. Anexo número quince.*”

Aunado a lo anterior, no se soslaya que el inventario que se agregó como anexo a dicha acta, corresponde a aquél que elaboró la encargada de ventas en agosto de dos mil nueve y que supervisó *1* como ***** y ***** de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en ese sentido, si bien es cierto al momento de suscribir el acta entrega-recepción no se practicó el inventario físico de las publicaciones, también lo es, que la verificación de existencias de publicaciones no formaba parte de las labores del personal de la Contraloría, aunado a que el propio *1* tampoco hizo mención al respecto al suscribir el acta, máxime que el inventario que se agregó como anexo fue el mismo que él autorizó en el mes de agosto, cumpliendo con su obligación como ***** de la Casa de la Cultura Jurídica.

En ese contexto, no es idónea la manifestación de *1* de que con el memorándum que elaboró la Dirección de Auditoría Administrativa, se demuestra que desde que firmó el

acta entrega recepción el tres de septiembre de dos mil nueve ya existía el faltante de publicaciones que nos ocupa, pues en ese documento no se sostiene esa aseveración, en tanto sólo se dejó constancia de lo siguiente:

*“Cabe señalar que con fecha 3 de septiembre de 2009, se llevo a cabo el acta de entrega-recepción de la titular de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministra Gloria León Orantes” la Mtra. Elvira Guadalupe Vázquez López quien entrega al Lic. *1*, con la intervención de la Licda. María del Socorro Antonieta Durán Morales, adscrita a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, sin precisar en el apartado XIV.- Ventas de libros, si existió faltante o sobrante alguno, ya que sólo se hace mención al Kárdex de las existencias.*

Cabe señalar que en proceso del acta de entrega-recepción, no se practicó inventario físico de las publicaciones oficiales, debido a la premura de tiempo con que se llevó a cabo, así como a que la encargada del área de ventas, fue designada para asistir al personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de este Alto Tribunal, situación por la cual no se determinaron los faltantes observados por este órgano interno de control.”

Si bien es cierto, la Dirección de Auditoría Administrativa de la Contraloría ratificó que en el acta entrega-recepción de tres de septiembre de dos mil nueve no se hizo el inventario físico de existencias de publicaciones oficiales, dada la premura con que se realizó el acta, además, porque la encargada del área de ventas fue designada para asistir al personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial en su elaboración, también lo es, que dicha circunstancia no elude la responsabilidad de *1*, como ***** de la Casa de la Cultura Jurídica, de verificar y firmar los inventarios físicos de existencia; en ese sentido, si el relativo al mes de agosto de dos mil nueve fue el que se agregó como anexo al acta en cita, en principio, no existía ningún faltante pues no se observa manifestación al respecto en él.

Por otra parte, el hecho del que sí se dejó constancia en el documento que se analiza, fue que en el apartado XIV,

de venta de libros, del acta entrega de tres de septiembre de dos mil nueve, no se precisó si existió faltante o sobrante alguno de las publicaciones oficiales, así como, que al no practicarse un inventario físico de las mismas, no se determinaron los faltantes observados por la Dirección de Auditoría Administrativa el veintiuno de septiembre de dos mil nueve; es decir, en ningún momento se afirmó que desde el tres de septiembre del año en cita, ya existía el faltante génesis de este asunto, por lo que las aseveraciones de *1* resultan incongruentes con los documentos que ofreció como prueba para desvirtuar la infracción administrativa que se le atribuye y en ese sentido no son idóneas para desacreditar su responsabilidad administrativa.

Asimismo, *1* manifestó que derivado del acta entrega-recepción, de tres de septiembre de dos mil nueve, tenía cuarenta y cinco días para practicar la revisión o arqueo de los bienes recibidos, plazo que concluía el veinte de octubre siguiente, no obstante, señala que fue removido del cargo el dieciséis de este último mes, dejándole en total y absoluto estado de indefensión para concluir el encargo que se le dio de la citada Casa de la Cultura Jurídica, ya que no pudo solicitar a *****, la anterior titular de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, información respecto de la venta de publicaciones del uno al veinticinco de agosto de dos mil nueve, ya que refiere en ese periodo era la única responsable de coordinar las actividades de la casa.

Aseveración que resulta insostenible, toda vez que la anterior titular de esa sede dejó materialmente el cargo en

agosto de dos mil nueve, lo anterior es así ya que en autos está acreditado que *1*, mediante oficios CCJ/CHIS/VTAS/16, CCJ/CHIS/VTAS/17, reportó la venta de publicaciones oficiales a la entonces Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, del periodo del uno de agosto al veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, según se advierte de las copias certificadas que obran a fojas 58 y 59 del cuaderno de pruebas 7, lo que avala el inventario físico que realizó *2*, encargada del área de venta de publicaciones oficiales de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en agosto de dos mil nueve (fojas 32 a 35 del cuaderno de pruebas 4), y fue firmado y aceptado por él sin mención alguna de faltante en esa área, de ahí que el inventario de agosto constituye el último que se realizó previo a que se detectara el faltante que nos ocupa.

En ese sentido, es evidente que no se dejó en estado de indefensión a *1*, pues el encargo de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a partir del tres de septiembre de dos mil nueve, no sólo fue llevar a cabo la revisión y verificación de los bienes, documentos e información que recibió, pues dicho acto implicaba, entre otras, la responsabilidad de coordinar, supervisar y administrar al personal responsable del módulo de ventas, con respecto a la existencia de publicaciones y al producto de la venta de las mismas, es decir, tenía que destinar los bienes que remitía la entonces Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su venta al público y que los recursos obtenidos de su venta se depositaran en la cuenta del Alto Tribunal; en ese sentido, su aseveración de que al ser removido del puesto se vio en total y

absoluto estado de indefensión para concluir el encargo que se le dio de la citada Casa de la Cultura Jurídica, es insuficiente para desvirtuar la infracción que se le atribuye en este expediente, pues como se adujo en líneas precedentes, él reportó la venta de publicaciones durante el mes de agosto, también está acreditado el envío de publicaciones oficiales y discos ópticos para su venta o comercialización a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los meses de agosto y septiembre de dos mil nueve, así como la recepción de dicho material por parte de *1*, como ***** de esa sede, con los documentos denominados “*Salidas de Almacén*” (fojas 6, 8, 10, 12, 14 y 16 del cuaderno de pruebas 7), en los que se observa una firma ilegible que concuerda, aparentemente, con la de *1* y, al respecto, el ex servidor público se limitó a referir que a su salida faltaban cuatro días para concluir la revisión.

En ese contexto, el que *1* señale que el haber sido separado del cargo a cuatro días de concluir el plazo que se otorgó en el acta entrega-recepción de tres de septiembre de dos mil nueve, le impidió solicitar a ***** información respecto de la venta de publicaciones en el periodo del uno al veinticinco de agosto de dos mil nueve, tampoco desvirtúa la responsabilidad que se le atribuye, en tanto él, como enlace de la Casa de la Cultura Jurídica, realizaba actividades concernientes a la venta de publicaciones oficiales, a decir, la recepción de publicaciones oficiales y discos ópticos para su venta y comercialización, reportes de ventas a la entonces Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y la validación del último inventario físico que elaboró *2*, encargada del área de ventas de la Casa de la Cultura Jurídica, previo a detectarse el faltante que

nos ocupa, tanto es así, que el propio *1*, en su escrito de defensas, reconoció que firmar las “salidas de almacén” y reportar la venta de dichas publicaciones, sólo evidencia que los ingresos correspondientes debían estar en la cuenta del Alto Tribunal.

Ahora, acerca de que *2* reconoció en el cuestionario de control interno que le aplicó personal de la Contraloría el veintitrés de septiembre de dos mil nueve, el faltante de trescientas ochenta y tres publicaciones inventariadas, al señalar se originó por no haber atendido de forma definitiva el área a su cargo (librería), debe señalarse que *1* validó el inventario físico que elaboró dicha servidora pública previo a detectarse el faltante que nos ocupa el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, en el que se advierte la existencia de dos mil trescientas dieciocho obras (fojas 32 a 35 del cuaderno de pruebas 4); luego, del uno de agosto al veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, reportó una venta de publicaciones de \$41,457.60 (cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), con los oficios CCJ/CHIS/VTAS/16 y CCJ/CHIS/VTAS/17, lo que pone de manifiesto que *1* no cumplió con las funciones que se le encomendaron como ***** de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, puesto que en los oficios antes citados no existe pronunciamiento sobre algún faltante de publicaciones, sino que lo detectó la Dirección General de Auditoría el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, esto es tres días antes del último periodo que reportó.

Por otra parte, *1* manifiesta que el Licenciado ***** , a quien entregó la Casa de la Cultura Jurídica el dieciséis de octubre de dos mil nueve, le

impidió la conclusión de la revisión y verificación que debía practicar en el término de cuarenta y cinco días naturales, otorgados en el acta entrega-recepción de tres de septiembre de ese mismo año, pues actuó de forma machista, soez y majadera para con todo el personal, señalando que lo anterior se acredita con las copias simples de los CCJ/CHIS/A/219 y CCJ/CHIS/628 y del acta administrativa de veintitrés de agosto de dos mil ocho, que ofreció como pruebas en su escrito de defensas (fojas 492 a 500 del expediente principal).

Respecto a dicha aseveración, debe reiterarse que el no haber llevado a cabo en el término de cuarenta y cinco días naturales la revisión y verificación de los bienes, documentos e información que recibió en el acta entrega-recepción de tres de septiembre de dos mil nueve, no es una conducta por la que se le inicio este procedimiento, sino que no coordinó, supervisó y administró al personal responsable del módulo de ventas, con respecto a la existencia de publicaciones y al producto de la venta de las mismas, además, debe resaltarse que las copias simples que ofreció como pruebas, datan del veintidós y veintitrés de agosto de dos mil ocho, es decir, un año antes de que se suscitara los hechos que ocupan a este procedimiento de responsabilidad administrativa.

Por lo anterior, se puede concluir que las defensas manifestadas por *1*, sólo son una narrativa de cómo ocurrieron los hechos desde su parecer, en relación con el faltante de trescientas ochenta y tres publicaciones oficiales en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero no constituyen

argumentos que desvirtúen la responsabilidad que se le atribuye, ni tampoco lo hacen los documentos que en copia simple exhibe consistentes en “memorándum de la revisión efectuada a la Casa de la Cultura Jurídica, por el periodo del primero de enero al treinta de junio de dos mil nueve”, oficios CCJ/CHIS/A/219 y CCJ/CHIS/628 y acta administrativa de veintitrés de agosto de dos mil ocho.

Por lo que debe reiterarse su responsabilidad en la infracción que dio motivo al inicio del procedimiento, es decir el incumplimiento a la obligación contenida en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

II. A. *2* ingreso a laborar a este Alto Tribunal el dieciséis de octubre de dos mil uno con el puesto de Secretaria Interina, posteriormente como Técnica Especializada, a partir del dieciséis de enero de dos mil dos y hasta el primero de febrero de dos mil cinco que fue nombrada *********, puesto que ocupaba en la época que ocurrieron los hechos materia de este procedimiento, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (fojas 111, 162 y 176 del cuaderno de pruebas 8).

B. De la copia certificada del documento denominado *“funciones principales de la plaza”*, se acreditan las funciones que ***2*** tenía a su cargo (foja 69 del cuaderno de pruebas 8) y son las siguientes:

“1. Encargada del área de librería.

2. Realizar todas las actividades correspondientes al área de librería, para su óptimo funcionamiento.

3. *Realizar todas aquellas actividades que el director considere convenientes para el adecuado funcionamiento de la casa de la cultura jurídica.”*

C. De las copias certificadas de los documentos denominados “arqueo de caja” efectuado a los fondos asignados a *2*, como responsable de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de veintiuno de septiembre de dos mil nueve y de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, se acredita con su firma, que fungía como la responsable directa de las ventas de publicaciones (foja 37 a 40 y 55 a 57 del cuaderno de pruebas 5).

D. De la copia certificada del “cuestionario de control interno” practicado a *2*, Técnica Operativa de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el veintitrés de septiembre de dos mil nueve (fojas 72 a 74 del cuaderno de pruebas 5) **reconoció que el faltante de trescientas ochenta y tres publicaciones inventariadas se originó por no haber atendido de forma definitiva el área a su cargo (librería).**

E. En el informe que *2* presentó, el cuatro de mayo de dos mil doce (fojas 509 a la 539 del expediente principal), se desprende:

Que en julio y agosto de dos mil nueve elaboró los inventarios físicos de las publicaciones oficiales

sin observación de faltantes, comentando que el último de éstos lo hizo redoblando esfuerzos, pues durante ese mes llevó a cabo funciones extraordinarias que le encomendó *1*, quien a esa fecha fungía como ***** de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras una licencia sin goce de sueldo que se le otorgó a ***** . Para acreditar lo anterior, acompañó a su escrito de defensas copia simple del acta de hechos de doce de agosto de dos mil nueve (fojas 513 y 514 del expediente principal), en la que refiere se le asignó una actividad que provocaría descuidar de manera temporal los programas de los que era responsable, consistente combatir el rezago de digitalización de once metros lineales de expedientes, para entregarlos en la transferencia del flujo de documentación jurisdiccional al Centro Archivístico Judicial del Alto Tribunal, cuya fecha límite de entrega era el quince de junio de dos mil nueve. Asimismo, afirma que en septiembre siguiente, *1* continuó asignándole actividades ajenas al área a su cargo, por lo que en la venta de publicaciones seguían participando sus compañeros, quienes en su momento tuvieron las llaves para acceder a la bodega.

El reconocimiento de *2* respecto a la elaboración de los inventarios físicos de julio y agosto de dos mil nueve, sin observación de faltantes, constituye una confesión expresa que merece valor probatorio pleno, conforme los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra

parte, al señalar que le fueron encomendadas otras actividades no se aduce que se le relevó del área de ventas, ni de sus obligaciones como encargada de la librería, tanto es así, que señaló que a pesar de la instrucción que recibió por parte del entonces ***** de la Casa de la Cultura Jurídica elaboró el inventario de agosto de dos mil nueve, además, refirió que en otras ocasiones le asignaron actividades distintas a su cargo cumpliéndolas con compromiso y lealtad, situación que reconoció la entonces titular de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en el oficio CCJ/CHIS/184, de dos de julio de dos mil nueve (fojas 515 a 517), en el que se advierte lo siguiente:

“2. Ahora bien como lo solicita en el segundo párrafo de su oficio de cuenta, le hago llegar un análisis comparativo de los méritos de cada uno de mis compañeros que pueden ser considerados para formar parte de las personas con posibilidades de ascenso de rango.

Núm.	Mérito	Lic. *****	Lic. *2*
1	Disposición	Invierte únicamente el tiempo que le marca su jornada de trabajo, aún en situaciones extraordinarias propias de su área. (Como sustento de esto se anexan las listas de asistencia del primer semestre de la anualidad en curso) Anexo dos.	Con frecuencia invierte más del tiempo que le marca su jornada de trabajo, incluso para apoyar actividades que no sean propias de su área. (Como sustento de esto se anexan las listas de asistencia del primer semestre de la anualidad en curso) Anexo tres.
2	Puntualidad	Regularmente no es exacto en la hora de entrada y sí es exacto a la hora de salida. Si bien es cierto no es frecuente que genere retardos, si es normal que no llegue puntual a su hora de entrada (9:00 am).	Frecuentemente llega antes de la hora de entrada (9:00 am) y se queda más del tiempo que marca su jornada laboral (5:00 pm). Pide permisos en muy pocas ocasiones.
3	Seguridad personal	Su trabajo implica atención al público (biblioteca y MAI) a pesar de estar familiarizado con sus funciones, demuestra inseguridad y en ocasiones enfado al atender a los usuarios.	Al estar familiarizada con su trabajo y estar segura de sus fortalezas, experiencias y logros, le hace brindar satisfactoriamente el servicio de librería a los usuarios.
4	Desarrollo de interrelaciones	Es muy apartado del resto de sus compañeros, no colabora con los de manera espontánea y cuando hay necesidad de requerirle apoyo extraordinario para un área	Logra buenas relaciones con el resto de sus compañeros, normalmente es solidaria y refleja compañerismo motivada entre otras cosas por su compromiso

Núm.	Mérito	Lic. *****	Lic. *2*
		distinta a la que tiene asignada normalmente demuestra enfado.	institucional.
5	Responsabilidad	Normalmente cumple con los plazos que tiene para desahogar las actividades que tiene encomendadas, en ocasiones ha habido actividades que deja rezagar bien por desconocimiento del procedimiento o bien por falta de organización. No es común que entregue el trabajo fuera de los plazos pero si ha habido situaciones en los que es necesario insistir y recordar varias veces que tiene un plazo próximo a vencer.	Siempre cumple con los plazos que tiene para desahogar las actividades que tiene asignadas, no tiene rezago en su área y lleva controles adecuados para dar seguimiento a las funciones que tiene asignadas.
6	Trabajo en equipo	Trabaja en equipo solamente si se le pide, en ocasiones sin que se le encomienda esa función adopta el papel de revisor del trabajo, pero no por ello se involucra en la realización del mismo, sino hasta que se le conmina a hacerlo.	Al asignarle trabajo en equipo generalmente colabora aún en aquellos casos en donde no se le pide, si detecta una necesidad en un área específica se suma al esfuerzo.
7	Pensamiento analítico	Normalmente analiza solo una parte de la situación por tanto sus resultados pueden ser parciales, poco efectivos e inflexibles.	Analiza con facilidad y rapidez los pros y contras de una situación, en ocasiones es necesaria apoyarla para que concrete sus alternativas de acción.
8	Calidad	Es cuidadoso al momento de realizar las tareas que se le encomiendan.	Es metódica al momento de realizar los trabajos que se le asignan.
9	Iniciativa e innovación	Nunca se ha pronunciado con alguna propuesta para mejorar, enriquecer o modificar su trabajo o los procedimientos que realiza para realizar el mismo. Ejecuta de manera mecánica sus tareas.	Frecuentemente hace propuestas para difundir las tareas que realiza. Esto se demuestra al consultar el comparativo de ventas respecto de todas las casas de la Cultura, logrando siempre esta CCJ estar n los primeros lugares. (Anexo cuatro).
10	Conocimientos del puesto	Responde a las exigencias normales del puesto.	Resultados y aptitudes superiores al promedio.

En efecto, de lo antes transcrito se pueden observar los méritos que, en contraste con los de Jaime Cruz Martínez, la entonces Directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, percibió de *2*, en los rubros de disposición, puntualidad, seguridad personal, desarrollo de interrelaciones, responsabilidad, trabajo en equipo,

pensamiento analítico, calidad, iniciativa e innovación y conocimientos del puesto; sin embargo, con dicho documento no desvirtúa que omitió realizar lo necesario para el óptimo funcionamiento de la librería, puesto que el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, se detectó un faltante de trescientas ochenta y dos obras inventariadas que asciende a la cantidad de veintinueve mil doscientos dos pesos, lo cual reconoció, incluso, la responsable, en el cuestionario de control interno que le aplicó la Dirección General de Auditoría el veintitrés de septiembre de dos mil nueve (fojas 72 a 74 del cuaderno de pruebas 5).

En ese mismo contexto, su sólo dicho de que en la venta de publicaciones participaban sus compañeros, quienes en su momento tuvieron las llaves para acceder a la bodega, tampoco es suficiente para desacreditar la infracción que se le atribuye, pues como se adujo en líneas precedentes, no se le prescindo de sus obligaciones como encargada de la librería, por lo que la guarda y custodia de esos bienes estaba bajo su responsabilidad y, en ese sentido, debía llevar un control estricto y cotidiano de las obras que se encontraban en esa área y no esperar a fin de mes para realizar una revisión, como lo expresó en su escrito de defensas, al señalar que fue en la auditoria que se llevó a cabo el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, que se percató del faltante de las trescientas ochenta y tres publicaciones.

En razón de lo anterior, se puede concluir que las defensas manifestadas por *2*, sólo son una narrativa de cómo ocurrieron los hechos desde su parecer, en relación con el faltante de trescientas ochenta y tres publicaciones oficiales en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero no constituyen argumentos que desvirtúen la responsabilidad que

se le atribuye, ni tampoco lo hacen los documentos que en copia simple exhibe consistentes en el acta de doce de agosto de dos mil nueve y el oficio CCJ/CHIS/184 con sus cuatro anexos. Por lo que debe reiterarse su responsabilidad en la infracción por la que se le inició procedimiento, es decir el incumplimiento a la obligación contenida en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Toda vez que de los informes presentados no se desprende prueba alguna que desvirtúe la infracción materia de este procedimiento, al no acreditarse alguna causa de justificación que pudiera relevar de la responsabilidad que se les atribuyen a la servidora pública y al exservidor público, lo procedente es determinar la imposición de una sanción.

En tales condiciones, existen elementos suficientes para tener por demostrado que *1* y *2* incumplieron con la obligación de cumplir con el servicio que se les encomienda, el primero debía coordinar cada una de las actividades de la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas entre ellas, la venta de publicaciones y en el caso la segunda debía realizar todas las actividades para el óptimo funcionamiento de la librería, entre ellas vender, conductas que encuadran en el supuesto de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir ambos con la obligación contenida en el artículo 8 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CUARTO. Sanción. Al quedar demostrada la infracción administrativa atribuida a *1*, y a *2*, se procede a individualizar la sanción que les corresponde conforme a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 45 y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

I) *1*.

a) Gravedad de la infracción. La conducta atribuida al infractor no es grave al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo establece el numeral 136 de esta misma ley, ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso concreto tampoco se le considera así.

b) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. De las copias fotostáticas certificadas del expediente personal del infractor que obran en autos, se observa que ingresó a laborar en este Alto Tribunal el diecisiete de septiembre de dos mil siete con nombramiento de Técnico Operativo (foja 307 del cuaderno de pruebas 8) y en la época en que ocurrieron los hechos ostentaba el nombramiento de Jefe de Departamento por tiempo fijo, puesto de confianza adscrito a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el periodo que comprendió

del dieciséis de abril al treinta de noviembre de dos mil nueve, fecha en la que causó baja por cambio de puesto y adscripción (fojas 233, 229, 224 y 218 del cuaderno de pruebas 8), por lo que tenía una antigüedad de más de dos años, siendo exigible conducirse conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como ocurre con todos los servidores públicos del Alto Tribunal.

c) Condiciones exteriores y los medios de ejecución.

El bien jurídico que se tutela en el caso, es el deber de los servidores públicos de cumplir con las obligaciones que les son asignadas en el desempeño del cargo, salvaguardando los principios de legalidad, honradez y eficacia. En el caso, *1*, como ***** de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no llevó a cabo una adecuada coordinación, supervisión y administración de la actividad relativa a la venta de publicaciones y al producto de esa venta, ya que el veintiuno de septiembre de dos mil nueve se detectó un faltante de trescientas ochenta y tres publicaciones en esa Casa de la Cultura Jurídica, de ahí que sea importante sancionar esa conducta para establecer un precedente que inhiba la posible afectación al bien jurídico tutelado en casos futuros.

1, como ***** de dicha Casa de la Cultura Jurídica, realizaba diversas actividades entre las que destacan las relativas a la venta y recepción de publicaciones oficiales, discos ópticos para su venta

y comercialización, reportes de ventas a la entonces Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y la validación del último inventario físico correspondiente al mes de agosto que elaboró *2*, como responsable del área de ventas, previo a detectarse el faltante que nos ocupa; por lo que las circunstancias en que cometió la falta, radican, esencialmente, en la omisión de verificar el inventario que validó con su firma.

d) Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados no hay información de que *1* lo haya sido previamente con motivo de alguna falta administrativa.

e) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. Es necesario puntualizar que no está acreditado que la conducta de *1* que dio lugar a la causa de responsabilidad en este procedimiento, le produjera beneficio económico, sin embargo sí generó daño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se le debe sancionar en forma económica.

Por lo que hace a la sanción pecuniaria, por el daño patrimonial causado, el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece:

***“Artículo 15.-** Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.*

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.”

Como puede advertirse, la imposición de una sanción económica procede cuando el servidor público ha incumplido con las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a través de la obtención de un beneficio o lucro, o por causar daños o perjuicios; monto que puede ser de hasta tres tantos de lo obtenido o causado, pero en ningún supuesto, menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos, o de los daños y perjuicios causados. De esta manera, el faltante ocasionado en el área de ventas, cuya supervisión correspondía a *1*, asciende a la cantidad de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos dos pesos 00/100 moneda nacional).

Por consiguiente, se estima justo que la sanción económica que se imponga a *1*, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 15, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que disponen para el caso que podrá ser de hasta tres tantos pero en ningún caso menor o igual del daño causado, sea igual al monto del daño más la mitad, por lo que dicha sanción económica debe ascender a la cantidad de \$43,803.00 (cuarenta y tres

mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda nacional), la cual podrá actualizarse para efectos de su pago en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

De tal suerte, para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tomarse en cuenta que la falta en que incurrió *1* no está considerada como grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no hubo enriquecimiento indebido pero si existió un daño patrimonial por la cantidad de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos dos pesos, 00/100 moneda nacional); por tanto, se propone sancionar a *1* con **amonestación privada** y, una sanción económica de \$43,803.00 (cuarenta y tres mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 135, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 45, fracciones II y III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

II) *2*.

a) Gravedad de la infracción. La conducta atribuida a la infractora no es grave al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo establece el numeral 136 de esta misma ley, ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso concreto tampoco se le considera así.

b) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. De las copias fotostáticas certificadas del expediente personal de la infractora que obran en autos, se observa que ingreso a laborar a este Alto Tribunal el dieciséis de octubre de dos mil uno con el puesto de Secretaria Interina, posteriormente como Técnica Especializada a partir del dieciséis de enero de dos mil dos y hasta el primero de febrero de dos mil cinco que fue nombrada *****, puesto que ocupaba en la época que ocurrieron los hechos materia de este procedimiento, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez Chiapas (fojas 111, 162 y 176 del cuaderno de pruebas 8).

c) Condiciones exteriores y los medios de ejecución. El bien jurídico que se tutela en el caso, es el deber de los servidores públicos de cumplir con las obligaciones que les son asignadas en el desempeño del cargo, salvaguardando los principios de legalidad, honradez y eficacia. En el caso, *2*, como encargada del área de ventas de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no realizó las actividades para el óptimo funcionamiento de la librería, entre ellas, la venta de publicaciones y al producto de esa venta, ya que el veintiuno de septiembre de dos mil nueve se detectó un faltante de trescientas ochenta y dos obras inventariadas en esa casa de la cultura jurídica, de ahí que sea importante sancionar esa conducta para establecer

un precedente que inhiba la posible afectación al bien jurídico tutelado en casos futuros.

d) Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados no hay información de que, *2* lo haya sido previamente con motivo de alguna falta administrativa.

e) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. No está acreditado que la conducta de *2*, que dio lugar a la causa de responsabilidad en este procedimiento, le produjera beneficio económico, sin embargo, sí generó daño a este Alto Tribunal, por lo que se le debe sancionar también en forma económica.

Por lo que hace a la sanción pecuniaria, por el daño patrimonial causado, el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece:

“Artículo 15.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.”

Como puede advertirse, la imposición de una sanción económica procede cuando el servidor público ha incumplido con las obligaciones previstas

en el artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a través de la obtención de un beneficio o lucro, o por causar daños o perjuicios; monto que puede ser de hasta tres tantos de lo obtenido o causado, pero en ningún supuesto, menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos, o de los daños y perjuicios causados. De esta manera, el faltante ocasionado en el área de ventas, cuya responsabilidad correspondía a *2*, asciende a la cantidad de \$29,202.00 (veintinueve mil doscientos dos pesos 00/100 moneda nacional).

Por consiguiente, se estima justo que la sanción económica que se imponga a *2*, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 15, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sea en cantidad de \$34,916.00 (treinta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), la cual podrá actualizarse para efectos de su pago en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

De tal suerte, para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tomarse en cuenta que la falta en que incurrió *2* no está considerada como grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no hubo enriquecimiento indebido pero si existió un daño patrimonial por la cantidad de \$29.202.00 (veintinueve mil doscientos dos pesos,

00/100 moneda nacional); por tanto, se propone sancionar a ***2*** con **amonestación privada** y, una sanción económica de \$34,916.00 (treinta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 135, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 45, fracciones II y III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan el deber que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les sea encomendado, y en este caso lo es el de conducirse acorde con los principios que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, previstos en los artículos 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es lo mismo que se exige a cualquier servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la conducta procesal observada por los infractores durante el desarrollo de este procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133, fracción II, 135, fracción II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 y 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45, fracción II y III 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, esta Presidencia determina que se debe imponer a cada uno de los infractores, ***1*** la sanción de **Amonestación Privada** y sanción económica de \$43,803.00 (cuarenta y tres mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda

nacional) y a *2*, la sanción de **Amonestación Privada** y sanción económica de \$34,916.00 (treinta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional).

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada a los expedientes de *1* y a *2*.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. *1* y *2* incurrieron en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

SEGUNDO. Se impone a *1*, la sanción consistente en **Amonestación Privada** y sanción económica de \$43,803.00 (cuarenta y tres mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda nacional).

TERCERO. Se impone a *2*, la sanción consistente en **Amonestación Privada** y sanción económica de \$34,916.00 (treinta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional).

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Contador Público Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 86/2009, instaurado en contra de *1* y *2*. Conste.

AFBR/JGCR/JHT.

“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.